

## **CONCLUSIONES**

## CONCLUSIONES

Por ANTONIO MARTÍNEZ TEIXIDÓ

El Proceso de Barcelona se inicia en el mes de noviembre de 1995 cuando los 15 países de la Unión Europea y 11 países de la orilla sur y este del Mediterráneo (las ausencias más destacadas fueron Libia y los Estados balcánicos de Eslovenia, Croacia, República Federal Yugoslava y Albania), acordaron por medio de la Declaración de Barcelona establecer una Asociación Euromediterránea con la finalidad de convertir este mar en una zona de «paz, estabilidad y prosperidad».

El Mediterráneo constituía una unidad política en la época del Imperio romano, en la que se le denominó *Mare Nostrum* y *Mare Internum*. Las partes oriental y occidental se convirtieron con el paso del tiempo en zonas desiguales en cultura, riqueza agrícola y desarrollo mercantil, desequilibrios de hecho que Teodosio institucionalizó al dividir el Imperio en el año 395 en Occidente y Oriente con capitales respectivamente en Roma y Constantinopla (antiguo Bizancio). Tras la disolución del orden romano en Occidente, a causa de los movimientos de pueblos germánicos y eslavos, el primer poder europeo quedó constituido por el Imperio bizantino y una segunda fuerza apareció en el este y sur del Mediterráneo, que influiría decisivamente en la evolución de Europa: el islam.

Tras un periodo convulsivo, el equilibrio de fuerzas en Europa se completa con una tercera potencia: el Imperio de Carlomagno. La conquista de Constantinopla por los turcos en el año 1453 hizo que Bizancio desapareciera como Estado barrera entre Oriente y Occidente y llevó la presencia del islam hasta los Balcanes. En tiempos del emperador Carlos V, el poder

musulmán, dominador de la orilla sur del Mediterráneo presionó sobre Europa a través del Imperio turco. El expansionismo otomano se frenó en el siglo XVI y a partir de ese momento, la frontera que separó las civilizaciones cristiana y musulmana fue permeable a los contactos técnicos y humanos, pero más hermética en lo referido a trasvases culturales entre ambas riberas. A lo largo de la Edad Moderna, el Imperio turco entró en decadencia, lo que permitió un creciente intervencionismo europeo en los asuntos árabes. Después de la Primera Guerra Mundial y tras dos siglos de declive, Turquía quedó limitada a sus fronteras actuales, se intensifica el colonialismo europeo y se establecen Mandatos francés e inglés en Oriente Medio. La decadencia del islam alcanzó entonces su punto culminante, pues solamente cuatro países musulmanes —Turquía, Arabia Saudí, Irán y Afganistán— seguían siendo independientes de toda forma de dominio no musulmán.

La colonización se tradujo en un dominio de los países de la orilla norte del Mediterráneo sobre los pueblos de la orilla sur, que fue acompañado de imposiciones políticas, económicas y culturales. Sin embargo, el retroceso del colonialismo occidental después de la Segunda Guerra Mundial y el hundimiento de la Unión Soviética hicieron que en 1995, unos 45 Estados independientes en todo el mundo tenían ya poblaciones mayoritariamente musulmanas.

Los procesos de descolonización en el Magreb fueron relativamente pacíficos, salvo el caso de la guerra de independencia argelina y algunos episodios aislados, pero al terminar esta etapa, resultaba inevitable que la memoria colectiva de los pueblos de una y otra ribera del Mediterráneo quedara marcada negativamente. La percepción occidental se vio reforzada por la obra de Samuel P. Huntington, en la que identifica diferentes líneas de fractura entre civilizaciones, entre las que se encuentra el Mediterráneo, zona de fricción entre las civilizaciones occidental e islámica que se encuentra viva desde hace 1.300 años, como hemos visto en el breve recorrido histórico. Por otra parte, en la época contemporánea, la visión musulmana sobre Occidente, se ha visto afectada negativamente por el sentimiento de frustración que produjo la derrota árabe en la guerra de los Seis Días y en el conflicto del Golfo. En el caso de España, la Edad Media dejó en el inconsciente colectivo la imagen del musulmán como el «enemigo», figura revitalizada con motivo de la guerra de España con Marruecos a mitad del siglo XIX, por los conflictos de comienzos del siglo XX, por los de Ifni y del Sáhara y que acontecimientos, como el de la isla Perejil, no contribuyen a paliar.

Durante la década de los años sesenta, la Comunidad Económica Europea (CEE) limitó sus contactos con el norte de África a cuestiones comerciales y a tratar de conseguir libre acceso de los bienes industriales europeos en los mercados magrebíes. Pero con el final de la guerra fría y de la confrontación en el centro de Europa, la atención se trasladó hacia su periferia este y sur y empezó a tomar forma una nueva política europea con respecto al Mediterráneo, motivada en parte porque las relaciones internacionales, en el mundo de la multipolaridad iban a caracterizarse por la persistencia de conflictos, y esto ha sucedido en el Mediterráneo. El pensamiento de los líderes políticos y militares occidentales de que la zona pudiera convertirse en un área de inestabilidad y constituir una amenaza para la seguridad de Europa, ha sido uno de los factores contribuyentes a que la mirada de los europeos, largo tiempo volcada hacia el Este, se haya dirigido hacia el Mediterráneo.

Los antecedentes del Proceso de Barcelona hay que situarlos en el Diálogo Euroárabe del año 1974, entre la Liga Árabe y la CEE, y en la propuesta hispano-italiana del año 1990, que contemplaba la organización de una Conferencia de Seguridad y Cooperación en el Mediterráneo (CSCM), con la finalidad de establecer un foro donde se discutieran temas de seguridad y cooperación, imitando en cierto modo la labor que se desarrollaba en la Conferencia de Seguridad y Cooperación en Europa (CSCE).

En el programa de trabajo de la Declaración de Barcelona se contemplaban reuniones periódicas de altos funcionarios con el fin de crear progresivamente «un espacio de paz, estabilidad y seguridad». En una de estas reuniones celebrada en julio de 1996, el diálogo fue bloqueado por el agravamiento de la situación en los territorios palestinos y las interrupciones en el Proceso de Paz en Oriente Medio (PPOM) y, como consecuencia de ello, los países árabes y en particular Líbano y Siria, se opusieron a la participación en contactos y actividades en las que estuviera presente Israel.

La Conferencia Euromediterránea de Malta, que tuvo lugar dos años después de la Conferencia de Barcelona (los días 15 y 16 de abril de 1997), terminó sin que pudieran aprobarse unas conclusiones, llegándose incluso a pensar que el Proceso estaba en apuros. A finales de abril de 1999 se celebró en Stuttgart una nueva Conferencia en la que los avances en el tema de seguridad fueron escasos, si bien se mantuvo la esperanza en que la continuidad del Proceso, y el desarrollo de un soporte de intereses comunes y permanentes, contribuirían a alcanzar los objetivos en esta materia del Diálogo de Barcelona.

En Stuttgart se aprobaron las líneas directrices de una Carta para la Paz y Estabilidad, que debería completarse y aprobarse en la Conferencia de Marsella, lo que no sucedió a pesar de que en junio de ese mismo año, en Santa María de Feira, los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea habían adoptado una «estrategia común para la región mediterránea», si bien se llegó a consensuar una serie de conceptos fundamentales.

Finalmente en Valencia, los días 22 y 23 de abril de 2002, ha tenido lugar la V Conferencia Euromediterránea, que hemos denominado «Barcelona V», de la que hay que señalar el hecho de celebrarse en un momento en el que el PPOM se encontraba en un momento especialmente difícil a causa del elevado grado de violencia que afectaba a las partes implicadas, lo que en cierto modo fue prueba para los miembros del Partenariado Euromediterráneo (PEM) de la necesidad y validez del Proceso de Barcelona.

El análisis que realiza Richard Gillespie en el capítulo cuarto de esta *Monografía*, sobre las numerosas dificultades experimentadas por el Proceso de Barcelona hasta el 11 de septiembre de 2001, es pesimista al señalar que: no se ha conseguido nada en el diálogo político; ha habido más retrocesos que avances en la situación de la democracia y de los derechos humanos; la zona de librecambio no se implantará en la fecha prevista; los intercambios mediterráneos siguen siendo muy escasos; las inversiones europeas no aumentan; los Fondos MEDA no funcionan lo bien que sería de desear y la liberalización económica no ha producido las privatizaciones que se consideran convenientes.

Hay que reconocer, sin embargo, que se han producido progresos en los años transcurridos desde la Conferencia inicial de Barcelona, aunque los logros hayan variado según los campos, lo cual no debe extrañarnos pues la situación del Mediterráneo y los distintos factores que intervienen en el Proceso son harto complicados.

En primer lugar, en la orilla norte, la Unión Europea parece dar una mayor importancia a la estabilidad que a la prosperidad, es decir, a lo político sobre lo económico. Por el contrario, en la orilla sur se piensa que en el PEM debe predominar el factor económico.

Otra dificultad consiste en la diferente importancia que al Diálogo Euro-mediterráneo concede cada uno de los países de la Unión Europea. Los europeos del Norte dirigen prioritariamente su mirada hacia la Europa del Este y en consecuencia, son los países del sur de Europa los que tienen que llevar la iniciativa en el Proceso de Barcelona. En temas de segu-

ridad, Estados Unidos, potencia hegemónica presente en la zona, ha mostrado siempre un interés tibio por el Diálogo Mediterráneo pues teme perder protagonismo en el PPOM, a lo que hay que añadir los recelos de los países de la ribera sur sobre el papel de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en la región, que algunos sectores de las sociedades árabes consideran como instrumento de la política exterior norteamericana en el Mediterráneo y más concretamente en Oriente Medio.

Las relaciones Sur-Sur, en el Mediterráneo son difíciles y están llenas de recelos en muchas ocasiones, como muestra el conflicto argelino-marroquí. El fracaso de la Unión del Magreb Árabe (UMA), que obliga a que las relaciones con Europa sean con cada uno de sus países; la distinta percepción del terrorismo entre la Unión Europea y las naciones árabes; la emigración ilegal y la criminalidad que va unida al tráfico de drogas; el islamismo emergente y los desequilibrios demográficos, son otros desafíos para la buena marcha del Diálogo.

Los enfrentamientos regionales, armados o políticos, como el conflicto árabe-israelí y el greco-turco en Chipre y el Egeo; la tragedia de Bosnia-Herzegovina o el drama de Kosovo; los excesos del fundamentalismo en Argelia; las tensiones entre Egipto y Libia o entre Marruecos y Argelia por la cuestión del Sáhara, inciden asimismo en las posibilidades de acuerdo y consenso entre los miembros del partenariado.

Es el conflicto palestino-israelí el que más ha pesado sobre los acuerdos euromediterráneos. Planteó importantes dificultades a la hora de redactar el texto definitivo de la Declaración de Barcelona e incluso estuvo a punto de hacer fracasar la Conferencia; impuso considerables obstáculos en la Conferencia de Malta; hizo que los avances en la de Stuttgart fueran mínimos; impidió que en la de Marsella se abordara el tema de la Carta para la Paz y la Estabilidad y, finalmente la Conferencia de Valencia, que tuvo lugar en las peores circunstancias que en tiempos recientes ha atravesado Palestina, pudo celebrarse ya que las delegaciones presentes decidieron hacer del tema un compartimento estanco, considerando por otra parte que el Proceso de Barcelona no es el foro apropiado para poner fin al conflicto, ni siquiera competente para intentarlo.

La segunda Intifada palestina, iniciada después de la visita de Ariel Sharon a la explanada de la mezquita Al Aqsa, ha desarrollado tal espiral de violencia, que puede afirmarse que el PPOM ha alcanzado su punto más bajo. El conflicto se ha convertido en una guerra de desgaste, en la que los atentados terroristas palestinos motivan operaciones de represalia del

Ejército israelí con ocupación de territorios bajo control de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) y en ocasiones con víctimas civiles. El primer ministro israelí declaró que:

«Israel responderá a los actos terroristas ocupando territorio de la ANP, que será mantenido en tanto continúe el terrorismo.»

El día 18 de noviembre de 2002, 120 carros de combate y blindados del Ejército israelí llevaron a cabo la operación de control de territorio palestino de mayor envergadura desde los Acuerdos de Oslo de 1993 al penetrar en Gaza, como respuesta a un atentado terrorista de Hamás y de la Yihad Islámica que cinco días antes, había causado la muerte a once israelíes, nueve de ellos militares.

La explicación de los acontecimientos desde ambas partes del conflicto difiere notablemente. Para Israel, la ocupación de los núcleos de población palestino tiene como objetivo la eliminación de terroristas y la búsqueda de armas. Para los palestinos, se trata de destruir físicamente todo lo que representa la ANP y dificultar que en un futuro pueda llegar a constituirse un Estado palestino independiente, proyecto con el que han mostrado su acuerdo Estados Unidos, en declaraciones del presidente Bush, y la Unión Europea.

Ariel Sharon, en el marco fijado por el presidente norteamericano, ha reconocido la posibilidad de establecer un Estado palestino, aunque con fronteras no definitivas y que comprendería el 40% de Cisjordania y las tres cuartas partes de la franja de Gaza, lo que permite dudar de su viabilidad ante dificultades como las cuestiones del uso del agua, la delimitación de las fronteras y los problemas económicos que presenta.

Israel ha adecuado su estrategia al consenso mundial de guerra contra el terrorismo derivado del 11 de septiembre de 2001, al condenar los atentados terroristas palestinos y a Yaser Arafat como «líder comprometido con el terror», argumento que ha contado con el apoyo del presidente Bush.

Los palestinos interpretan las operaciones de castigo de Ariel Sharon y ocupación de su territorio como instrumento no declarado del dirigente israelí, que oculta el verdadero objetivo de conseguir el Gran Israel, sueño judío durante los 2.000 años de diáspora, mediante la disculpa de una confrontación de Occidente con el fundamentalismo islámico. Las operaciones del Ejército israelí tratarían de exacerbar la tendencia a la emigración que ya sufre Palestina de forma que sus habitantes musulmanes se

vieran forzados a abandonar los territorios ocupados y dirigirse a países vecinos, particularmente a Jordania.

Los acontecimientos de la segunda Intifada han incidido en gran manera en las opiniones de israelíes y palestinos. Para los primeros, se hace necesario separar territorialmente ambas comunidades. Los judíos creen que su supervivencia depende de su fortaleza y no de su debilidad, y un alto porcentaje considera que la posibilidad de un compromiso entre ambas partes está más lejos que nunca. A ello hay que añadir que la extrema derecha judía se opone a la soberanía palestina en Cisjordania y propone que los palestinos emigren fuera del país.

El problema de los asentamientos refleja en la práctica la estrategia israelí. En el año 2001, el número de colonos instalados en Cisjordania, Gaza y Jerusalén se ha incrementado en un 5% hasta alcanzar un total de 383.000 colonos y 157 asentamientos. Las colonias en Cisjordania ocupan ya un 42% del territorio. Israel se ha anexionado ya Jerusalén Este, aunque la medida no haya sido reconocida por el resto del mundo. La política de apoyo de Sharon a los asentamientos, que reciben *per cápita* hasta diez veces más que cualquier ciudad israelí de menos de 100.000 habitantes, complica la solución tantas veces preconizada de «paz por territorios», al hacer más difícil una futura definición de fronteras.

La salida de los laboristas del Gobierno israelí de «unidad nacional» y la decisión de considerar rotos los Acuerdos de Oslo, han abierto un periodo de incertidumbre. El vencedor de las elecciones internas del Partido Laborista, el general Amran Mitzna ha propuesto por el contrario reanudar las negociaciones con los palestinos siguiendo los Acuerdos de Oslo y, en caso de fracasar el diálogo, agrupar los asentamientos en tres zonas y separar a los judíos de los palestinos. La situación es tan complicada que incluso *The Economist*, en sus previsiones para el año 2003, pronostica que si bien la alianza de Israel con Estados Unidos no se resquebrajará, el liderazgo de Sharon será menos seguro al considerar sus compatriotas que su política lleva al país al desastre y que, en cualquier caso, no habrá paz en dicho año, lo que seguirá pesando en el Proceso de Barcelona.

A pesar del grave deterioro de la situación, España consiguió organizar el IV Foro de Formentor, en los primeros días de noviembre de 2002, aunque no estuvo presente en la reunión Yaser Arafat ni miembros del Likud, que lo habían estado en reuniones anteriores. El mediador de la Unión Europea, Miguel Ángel Moratinos planteó la posibilidad de que el Estado palestino sea una realidad para el año 2005, si bien para ello sería nece-

sario que el cuarteto —Organización de Naciones Unidas (ONU), Estados Unidos, Unión Europea y Rusia— se involucrara más y mejor. La opinión más generalizada fue que se avecinan tiempos difíciles.

Otro de los conflictos clásicos del Mediterráneo Oriental, el enfrentamiento entre Grecia y Turquía por Chipre y las islas del mar Egeo presenta, por el contrario, un panorama esperanzador e inimaginable hace escasos años. Ambos países firmaron el pasado mes de febrero un acuerdo para la construcción de un gasoducto que suministrará a Grecia gas procedente del Asia Centra e Irán a través de Turquía, y después a los mercados de Europa Occidental. En los pasados tres años, 60 empresas griegas han realizado inversiones en Turquía.

El día 11 de noviembre último, el secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, propuso como solución para poner fin a la división de la isla de Chipre la adopción de un Estado inspirado en la Confederación Helvética, que adoptaría la forma de una asociación indisoluble entre el gobierno de un Estado común, con Presidencia rotatoria y dos Estados constituyentes, uno greco-chipriota y otro turco-chipriota. Sin embargo, al final no ha habido acuerdo sobre el plan de la ONU en unas conversaciones celebradas en Copenhague los días 12 y 13 de diciembre pasado. No obstante, la reunificación no es condición necesaria para el ingreso de la República de Chipre, formada por los chipriotas griegos y la única reconocida por la comunidad internacional.

La victoria en las pasadas elecciones turcas del Partido islamista moderado de la Justicia y el Desarrollo, de Erdogan, puede facilitar la conclusión del acuerdo sobre Chipre, dado su compromiso a favor de la democracia, la tolerancia religiosa y su acercamiento a la Unión Europea. El debate sobre la posible adhesión de Turquía, a la que parte de los países europeos no se opone, pero de la que Giscard d'Estaing ha dicho que supondría «el fin» de la Unión Europea y, ha finalizado de momento con la decisión de la Unión Europea de no comenzar las negociaciones para su incorporación hasta el año 2005, tras una evaluación en diciembre del año 2004 para ver si este país cumple los requisitos exigidos a todos los candidatos. Turquía ha acogido con decepción esta decisión, que oficialmente no guarda relación con la falta de avances en el conflicto chipriota.

La incorporación de Turquía a la Unión Europea podría tener otras implicaciones toda vez que el Magreb, en este caso Marruecos, Argelia y Túnez, aguardan su turno con impaciencia, pues Europa es para ellos principalmente un espacio económico y tecnológico en el que poder des-

cargar indefinidamente su exceso de población, mientras sus economías no estén a la altura de las europeas.

Estados Unidos juega sus cartas a favor del ingreso de Turquía al haber solicitado el permiso turco para utilizar sus bases aéreas y navales en caso de un ataque contra Irak, así como para desplegar un centenar de miles de soldados estadounidenses en la frontera entre Irak y Turquía. Este último país ha permitido el acuerdo entre la Unión Europea y la OTAN que permitirá utilizar las capacidades militares de la Alianza Atlántica en el desarrollo de misiones humanitarias y de gestión de crisis internacionales. El acuerdo estaba bloqueado por las reticencias turcas respecto a Grecia. Las muestras de colaboración de Turquía con la Unión Europea y su alineación con Occidente hacen más difícil una negativa europea a su posible adhesión.

Argelia mantiene unas profundas diferencias con Marruecos motivadas por el conflicto del Sáhara Occidental que ha bloqueado la incipiente integración regional que representaba la UMA. La cuestión del Sáhara ha sido durante largo tiempo un obstáculo que ha entorpecido las relaciones hispano-marroquíes. El problema tiene una naturaleza inequívocamente trilateral: Marruecos, Argelia y España. Aún cuando la retirada del embajador de Marruecos en Madrid, en el mes de octubre de 2001, la atribuyeron algunos medios a desacuerdos causados por la pesca y la inmigración ilegal, la opinión más generalizada consideró que se trataba de una medida de presión para que España adoptase una posición de apoyo a las tesis marroquíes para legitimar su ocupación del Sáhara Occidental.

El Consejo de Seguridad de la ONU, a pesar de que Washington se mostraba favorable a la que se denominó «tercera vía» para solucionar el conflicto, consistente en abrir un proceso de autonomía regional en el marco de la soberanía marroquí, dejó abiertas todas las opciones para resolver la cuestión y prorrogó el mandato de la Misión de las Naciones Unidas (MINURSO) en el territorio que en principio deberá finalizar el 31 de enero de 2003.

El Gobierno marroquí reaccionó duramente sugiriendo, a través de la prensa, la conveniencia de revisar el Acuerdo de Amistad y Buena Vecindad, firmado con España en el año 1992, y establecer un nuevo marco de relaciones. El incidente del islote Perejil elevó la tensión entre ambos países hasta límites no conocidos desde la Marcha Verde. Fuerzas especiales españolas llevaron a cabo una perfecta operación de desalojo del islote, y Estados Unidos favoreció un acuerdo para «restaurar y mantener la situación de la isla previa a julio 2002».

La actitud de Marruecos resulta incomprensible en el marco del Diálogo Mediterráneo puesto que los acuerdos con España le son especialmente beneficiosos, pues el Reino magrebí es el primer destinatario de la ayuda internacional española al desarrollo y 800 empresas españolas han hecho un particular esfuerzo en inversiones y relaciones comerciales, sin olvidar que en España viven más de 250.000 marroquíes.

La explicación que se ha dado a este comportamiento es que, tras la llegada al trono de Mohamed VI, Marruecos modificó el Código de Hidrocarburos y concedió permisos de explotación a compañías norteamericanas, francesas y británicas y, a partir de ahí, las políticas de estos países hacia la cuestión del Sáhara dieron un vuelco espectacular. Marruecos ha sido y es para Estados Unidos un aliado estratégico en la región y Francia parece aprovechar la tensión hispano-marroquí para tomar posiciones empresariales y comerciales y equivocadamente, el entorno de Mohamed VI ha creído que con el apoyo de Estados Unidos y Francia, se podía permitir todo.

La realidad es diferente pues, tras el incidente de la isla de Perejil, la Unión Europea advirtió que las relaciones entre Marruecos y Bruselas podían enturbiarse. A pesar de ello, el Gobierno marroquí insistió en su línea de provocación y el 4 de agosto de 2002 llamó a la «movilización de todas las fuerzas vivas» para «liberar» los territorios españoles de Ceuta, Melilla y las islas Chafarinas.

El nuevo Gobierno marroquí, designado tras las elecciones legislativas de septiembre pasado parece haber sacado conclusiones de la pérdida que ha supuesto para Marruecos la crisis con España, tanto en el terreno económico, como político y diplomático. La visita a Madrid el 11 de diciembre del ministro marroquí de Asuntos Exteriores, Mohamed Benaisa, y la oferta del rey Mohamed VI para colaborar con España en la catástrofe del *Prestige* mediante la apertura de caladeros a los pesqueros gallegos durante tres meses, podrían permitir desbloquear la crisis hispano-marroquí y recuperar el clima de diálogo entre los dos países, abriendo el camino a la reanudación completa de relaciones.

Por otra parte, España y Argelia firmaron el pasado día 8 de octubre, un Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación que convierte en «estratégica» la relación bilateral entre ambos países, por lo que el fortalecimiento de los vínculos con Argel podría traer en consecuencia un papel secundario para Rabat en la política española en caso de que no se llegaran a normalizar las relaciones hispano-marroquíes.

A pesar de todos los problemas surgidos entre España y Marruecos, la Unión Europea considera que es del interés de todos que los dos países resuelvan sus diferencias y mientras tanto, continúan en Bruselas las discusiones sobre distintos aspectos del Tratado de Asociación entre Marruecos y la Unión en el ámbito de la pesca, Justicia e Interior y readmisión de inmigrantes ilegales, habiendo los Fondos MEDA reservado un presupuesto de 40 millones de euros para la lucha contra este último fenómeno. No obstante, las negociaciones en el capítulo agrícola, que interesa muy particularmente al vecino del Sur, no han alcanzado los objetivos deseados.

En resumen, si bien la ya larga crisis entre España y Marruecos pudiera empezar a desbloquearse próximamente, lo que sería positivo para el Proceso de Barcelona y la Asociación Euromediterránea, resulta más realista esperar al debate que sobre el Sáhara Occidental tendrá lugar en enero de 2003 en el Consejo de Seguridad de la ONU, con presencia española.

Conviene reconocer que, además de estos conflictos a los que nos hemos referido, la gran variedad de iniciativas oficiales y extraoficiales sobre el Mediterráneo, están produciendo un cierto «cansancio de diálogo», especialmente porque muchas iniciativas se encuentran en un plano muy conceptual.

Transcurridos siete años desde su inicio, parece evidente para algunos que el Proceso de Barcelona ha entrado en una fase de burocratización, en un laberinto institucional complejo en el que se entrelazan una multiplicidad de grupos de trabajo y foros, por lo que es necesario darle un nuevo impulso político. Sin embargo, si bien es cierto que numerosas reuniones de diverso nivel, contactos entre los 27 países miembros, visitas de la Unión Europea a los 12 socios del Sur, conferencias sectoriales de ministros, etc., nadie puede negar hoy que el concepto euromediterráneo se ha consolidado como nexo de unión de una realidad marcadamente heterogénea. A partir de la reunión de Santa María de Feira en el año 2000, el Proceso se ha revigorizado y culminado, de momento, en la reunión de Valencia «Barcelona V», en abril 2002.

La vitalidad del Proceso, a pesar de que esta lejos de alcanzarse el objetivo de convertir el Mediterráneo en una zona de «paz y estabilidad, de prosperidad compartida y de comprensión intercultural», se pone de manifiesto al analizar las conclusiones de la Presidencia y el Plan de Acción de Valencia (PAV), aprobados al final de la reunión, que se incluyen como anexos p. 251.

Para llegar a un resultado positivo, la Presidencia española incorporó al Proceso la idea de devolver a todos los países participantes el sentido de pertenencia y de protagonismo, así como una mayor transparencia para llegar mejor a la opinión pública y conseguir una mayor participación de la sociedad civil.

El PAV, en su capítulo político y de seguridad, incluye por primera vez formalmente el terrorismo y propone la activación de una red euromediterránea de contacto para luchar contra este fenómeno. Destaca la necesidad de alcanzar un lenguaje común en seguridad y defensa, para evitar malentendidos conceptuales y terminológicos, y desarrollar mecanismos de prevención diplomática y de tratamiento de crisis.

En el capítulo económico, reitera el objetivo de crear una zona de libre cambio para el año 2010; apoya el Proceso de Agadir para que se logren activar acuerdos de libre comercio Sur-Sur, y propone constituir un grupo de trabajo sobre medidas comerciales que sean efectivas para la integración regional. Destaca la necesidad de una mayor liberalización en el mercado de productos agrícolas y de analizar el impacto que esto tendría tanto en la Unión Europea como en los países de la ribera sur. Insiste en la conveniencia de crear un Banco Euromediterráneo para el Desarrollo y que, mientras se llega a esta decisión, dedicar parte de la estructura del Banco Europeo de Inversión a asuntos euromediterráneos.

El PAV señala la necesidad de mejorar la gestión del Programa MEDA, así como de dar impulso a proyectos de enlace Norte-Sur de las redes de transporte, energía y telecomunicaciones, y animar al sector privado para que participe en los mismos. Además de insistir en que es preciso cooperar en áreas de investigación y desarrollo y seguir las pautas de la Conferencia de Johannesburgo para un desarrollo sostenible, el Plan anima a establecer un diálogo reforzado institucional para analizar las consecuencias de la adopción del euro, la ampliación de la Unión Europea y el impacto socioeconómico de 11 de septiembre 2001.

La importancia del tercer capítulo de la Declaración de Barcelona, con los aspectos social, cultural y humano, se hace visible en el Plan al insistir en la necesidad de cooperar en el campo de la Justicia y en la lucha contra el tráfico de drogas, el crimen organizado y el terrorismo, unido todo ello a medidas sobre la integración social de los emigrantes, para lo que considera indispensable la cooperación regional.

El PAV resalta la trascendencia cada vez mayor del diálogo entre culturas y civilizaciones en las áreas de juventud, educación y medios de comunicación; la vigencia del Programa Tempus y, en el marco de la dimensión social, la importancia de la formación y el empleo, la incorporación de la mujer al trabajo y el análisis de la evolución demográfica.

Finaliza el Plan con algunas medidas concretas institucionales como la creación de una Asamblea Parlamentaria Euromediterránea, la Fundación Euromediterránea para promover el Diálogo de Culturas y Civilizaciones o la reestructuración del Comité Euromed y España llegó incluso a proponer la designación de un enviado especial de los 27 países, un «*mister MED*», capaz de representar y promocionar el PEM.

Uno de los asuntos incluidos en el Plan, la inmigración, fue el tema estrella de la Asamblea de Jefes de Gobierno de la Unión Europea celebrada en Sevilla poco después, los días 21 y 22 de junio 2002. El debate de la Asamblea se centró en la forma de controlar el flujo de inmigrantes a la Unión Europea, la Comisión Europea estima que últimamente entran clandestinamente unas 500.000 personas al año de las que en el 2000 fueron repatriadas casi 175.000. De este flujo, la segunda zona de origen es el norte de África.

La Unión Europea es consciente de la necesidad de la inmigración como aportación a su fuerza laboral y si bien los países europeos desearían disponer de personas con las cualificaciones profesionales que su economía necesita, los puestos de trabajo que cubren suelen ser en la construcción o labores agrícolas.

A la emigración se debe el 70% del crecimiento demográfico de la Unión Europea y un cálculo de la ONU en el año 2000 señalaba que para mantener el nivel de población activa se necesitaría hasta el año 2025 un total de 159 millones de emigrantes.

El Tratado de Amsterdam (1997) marca como objetivo una política común europea de inmigración y asilo, y el Consejo de Tampere (1999) se propuso armonizar las políticas de entrada de emigrantes a partir de la evaluación de las necesidades económicas de cada país.

El Programa de Consejo de Sevilla al que nos hemos referido, incluía tres puntos principales: combatir la inmigración ilegal, regular la legal y armonizar el derecho de asilo. La propuesta más polémica de las presentadas consistía en penar con la suspensión de la ayuda al desarrollo a los países de origen que no colaboraran con la Unión Europea. La oposición de

Francia y de Suecia obligó a abandonar esta medida, admitiéndose no obstante frenar la intensidad de las relaciones con estos países, pero no reducir la ayuda al desarrollo. No hubo acuerdo sobre la idea de fijar en común cupos de inmigrantes, si bien se decidió admitir en futuros acuerdos de cooperación con otros países la gestión conjunta de los flujos migratorios.

Ante la sensación popular de que la inmigración no está siendo controlada, los países europeos están en la línea de reforzar la lucha contra la ilegal, establecer cupos de acuerdo con las necesidades y endurecer el derecho de asilo y el reagrupamiento familiar, así como establecer reglas para que los recién llegados aprendan la lengua y los usos sociales del país de acogida.

Sin embargo, las prioridades de los países del sur del Mediterráneo son otras pues, admitiendo el diálogo sobre las migraciones, la inmigración ilegal y las condiciones de retorno de los que se encuentren en situación irregular, y sus gobiernos están mucho más interesados en programas que favorezcan la igualdad de trato entre ciudadanos de ambas riberas y en la reducción de la presión migratoria, mediante mejoras de las condiciones de vida, creación de empleo y desarrollo de las zonas de emigración, así como la reinserción de los ilegales que fueran repatriados.

La política europea de control de fronteras tiene aspectos controvertidos. Un estudio de la Universidad de Pennsylvania señala que en los años sesenta, cuando Estados Unidos prohibió el trabajo temporal a los mexicanos, se produjo un gran incremento de inmigrantes ilegales y Wayne Cornelius, autor de un trabajo publicado en la *Population and Development Review* afirma que:

«Cuando las dificultades y el coste para desplazarse o regresar a su país, se incrementa la tendencia de los inmigrantes legales o ilegales a permanecer en la tierra de acogida.»

Un problema de gran trascendencia como es el de las drogas, pone de relieve la diferencia entre deseos y realidades en la Asociación Euromediterránea. En el Documento-Marco se propone la cooperación de los socios para entrenamiento del personal de policía y aduanas y coordinar la labor de sus efectivos, al tiempo que se fomenta el intercambio de información. Sin embargo, parece ser que en el caso de Marruecos, el cultivo y la exportación de hachís no solo no ha disminuido, sino que se ha duplicado en los últimos tres años, coincidiendo con la llegada al poder de

Mohamed VI. Según datos del Ministerio de Agricultura marroquí, la superficie dedicada al cultivo de la droga ha pasado de 70.000 hectáreas en el año 1993 a más de 100.000 en el año 2001. La política preconizada por la Unión Europea y aceptada en principio por el Reino de Marruecos de reconversión de los cultivos de droga en cultivos agrícolas rentables ha sido un auténtico fracaso. El problema consiste en que el más rentable de los cultivos alternativos, que es la higuera, alcanza un rendimiento que oscila entre un 25% a un 50% del obtenido con la droga.

Los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001, unidos a los flujos procedentes de los países de la ribera sur, de religión musulmana, ha incrementado el interés de Europa por el mundo islámico. Aunque la interpretación oficial europea no siga las tesis de Samuel P. Huntington sobre el «choque de civilizaciones», la experiencia de las relaciones con las comunidades musulmanas residentes en Europa (1,3 millones en Gran Bretaña; 3,2 millones en Alemania y 4,2 millones en Francia) da un carácter especial al Diálogo de Civilizaciones y Culturas auspiciado por el PAV.

Los distintos países de la Unión Europea tienen normas no siempre iguales en temas como la enseñanza del islam en las escuelas, la regulación de mezquitas e imames o la aplicación de las exigencias islámicas en los enterramientos. Más interesante desde el punto de vista político es el derecho a la nacionalidad o al voto en los países de residencia y en particular, la existencia de organizaciones islámicas que tratan de perpetuar los lazos de los inmigrantes con sus territorios de origen. A título de ejemplo, la mayor organización para inmigrantes en Alemania es DITIB, delegación de la Oficina estatal para la religión del Gobierno turco. Aunque Turquía es un Estado laico y hasta ahora hostil al fundamentalismo, DITIB defiende los intereses nacionales de Turquía y anima a los turcos residentes en la República Federal a que sigan considerándose ciudadanos de la tierra de sus ancestros. La integración no resulta fácil cuando los musulmanes solicitan que les sean aplicadas normas islámicas en su trabajo, como puede ser la posibilidad de efectuar cinco rezos diarios o que el viernes sea considerado su día festivo. En el fondo, lo que tratan algunos de ellos es expandir la religión islámica en el país de residencia. No obstante, los muchos miles de inmigrantes musulmanes que se han quedado a vivir en las distintas naciones europeas es una demostración de que la integración es posible.

El hecho de que el islam sea la religión que más está creciendo en el mundo; el que en las últimas elecciones en Marruecos, Pakistán, Bahrein y Turquía, los partidos islamistas hayan ganado mucho terreno, y la ten-

dencia de gran parte de la población de los países musulmanes a defender la identidad islámica como reafirmación de su dignidad, destacan el acierto de las previsiones sobre culturas y civilizaciones del capítulo tercero del PAV.

La finalidad última de esta *Monografía*, como su título indica, es analizar el Proceso de Barcelona y su entorno después del 11 de septiembre de 2001. El ataque contra las torres gemelas de Nueva York y el Pentágono, ha transformado radicalmente la percepción existente sobre los peligros que acechan a un mundo globalizado, y sus efectos se han hecho sentir en todos los ámbitos introduciendo un conjunto de profundas modificaciones en el mundo moderno que podríamos calificarlas como «cambio de época». Estas modificaciones están transformando las percepciones y los datos de los grandes problemas del siglo XXI.

Y esto está sucediendo también en el Mediterráneo, que se ha revalorizado como espacio necesario de encuentro y de trabajo común entre Occidente y el mundo musulmán.

En el primer capítulo o cesto del PAV, en su parte política, se señala que:

«El respeto a los derechos humanos y la democracia en la región sigue creando inquietud.»

A excepción de Chipre y Malta, ninguno de los socios del sur del Mediterráneo presenta un balance satisfactorio a este respecto. La lucha contra el terrorismo tras el 11 de septiembre de 2001 ha dado argumentos aparentemente razonables a las élites de algunos países para incrementar las medidas represivas de sus regímenes y la Unión Europea ha manifestado su preocupación por cuestiones tales como detenciones y encarcelamientos sin un proceso adecuado, falta de control de la violencia de grupos extremistas, restricciones a la libertad de expresión y asociación, y otras cuestiones.

En el fortalecimiento de la democracia, Marruecos y Turquía han celebrado elecciones en 2002, pero Jordania todavía no ha puesto fecha para sus próximos comicios, retrasados ya más de un año, y ha detenido a centenares de radicales islámicos con la excusa de que las nuevas medidas de seguridad son el precio de la estabilidad en tiempos difíciles.

El problema de fondo de la política interior de los países de la ribera sur del Mediterráneo es la democratización de sus regímenes, pero la Unión Europea sigue dejando margen a la hora de avanzar hacia dicho objetivo, al reconocer a todos los socios el derecho a elegir y articular su propio sistema democrático.

Tanto en lo referente a seguridad en el primer cesto, como en el Documento-Marco para la cooperación en materia de Justicia, la lucha contra la droga, el crimen organizado y el terrorismo, se resalta que los 27 miembros están obligados a cumplir la resolución 1.373 de Naciones Unidas, que exige a los Estados prevenir y reprimir en su territorio la financiación y preparación de actos terroristas.

La aplicación de estas medidas puede producir tensiones entre países aliados. La Administración norteamericana ha incluido a Marruecos en la lista de países sospechosos de albergar células terroristas vinculadas a la organización Al Qaida. En la primavera de 2002 fue desarticulada en el Reino alauita una red de Al Qaida compuesta de tres ciudadanos saudíes y siete marroquíes. El alto número de marroquíes presos en Guantánamo y la implicación de ciudadanos de este país en redes terroristas, ha empujado a Estados Unidos a tomar una decisión que daña la imagen del reino de Mohamed VI.

Las relaciones bilaterales de Estados Unidos con Arabia Saudí, país del entorno mediterráneo, están atravesando un periodo difícil ante la sospecha de que este país, e incluso personas relacionadas con la Familia Real saudí, hubieran entregado fondos para Al Qaida, Hamás y el Yihad Islámico. A ello se une el que Arabia Saudí financia el mundo de las escuelas islámicas en diversos países, siguiendo la tradición wahabí, que es la tendencia islámica más extremista. La retirada de inversiones saudíes de empresas y propiedades norteamericanas ha agravado las tensiones en este país clave en los proyectos del presidente Bush, en caso de producirse un ataque a Irak.

Recientemente Arabia Saudí ha reaccionado anunciando la puesta en marcha de un comité que controlará las actividades de las asociaciones caritativas y las transferencias monetarias entre bancos.

Por otra parte, el presidente Bush no quiere perder la colaboración saudí y trata por otra parte de no irritar a sus aliados árabes que venden a Estados Unidos la sexta parte del petróleo que consumen, si bien al mismo tiempo cuenta con una base alternativa en Qatar para el caso de que los saudíes no permitieran el uso de sus bases en caso de conflicto con Irak.

Un tema de política exterior, que puede tener repercusiones en la Asociación Euromediterránea ha sido la disolución de la Organización de la Unidad Africana (OUA), tras 39 años de funcionamiento no especialmente eficaz, y la creación de la Unión Africana (UA).

La UA nace en Durban, África del Sur, el 8 de julio de 2002 y tiene como finalidad suprimir las fronteras para instaurar un espacio único entre los 53 Estados miembros. Inspirada en la Unión Europea, los jefes de Estado reunidos se comprometieron a tomar las medidas necesarias para crear un Parlamento Panafricano, un Tribunal de Justicia, un Banco Central y una moneda única, y homologar sus sistemas electorales. Además, dieron su acuerdo para constituir una fuerza permanente para mantenimiento de la paz, que en el futuro contribuya a prevenir catástrofes como el genocidio de Ruanda en el año 1994.

En caso de que la UA vaya progresando en sus objetivos, podría ser un factor que impulsara a los países del norte de África a una mayor unión, hasta ahora no conseguida. Por otra parte, no parece de momento que vaya a plantearse un enfrentamiento entre la zona de libre cambio prevista por la Unión Europea para el año 2010 y el proyecto africano de un espacio económico único.

Las consecuencias económicas de los atentados del 11 de septiembre han sido analizadas en profundidad por la Comisión Europea, llegándose a la conclusión de que no eran fácilmente dissociables de las producidas por otros factores como la ralentización del crecimiento mundial en el 2001, el deterioro político creado por la segunda Intifada en Oriente Medio y el estado general de la economía de los países mediterráneos.

El efecto más inmediato fue la disminución de la actividad turística, siendo Turquía y Egipto los más afectados y en países como Israel, Líbano o Jordania, a los efectos de la segunda Intifada se unieron los del 11 de septiembre de 2001. El transporte aéreo se vio también afectado, las remesas de los emigrantes disminuyeron por el recelo de sus países de acogida y se confirmó la situación de debilidad de las inversiones extranjeras en el Mediterráneo.

Estos efectos han sido más o menos absorbidos por los socios mediterráneos del Sur y la Presidencia española de la Reunión en Valencia, dándose cuenta de que lo más importante era restablecer un clima de confianza que favorezca las inversiones productivas, planteó la necesidad de dar un nuevo impulso a la cooperación económica europea con los países de la ribera sur.

Las recomendaciones del PAV en su capítulo económico, a las que ya se ha hecho referencia anteriormente, significan el fortalecimiento de la asistencia financiera a los socios mediterráneos, con el pensamiento de ir más

allá de la zona de libre cambio y llegar un día al Mercado Único; desarrollar las estrategias regionales en infraestructuras; promover la diversificación de los sistemas productivos; potenciar el comercio interregional; liberalizar el comercio de servicios y fomentar la innovación y uso de nuevas tecnologías. En resumen, dar un salto cualitativo en las relaciones económicas de las dos orillas del Mediterráneo.

El diálogo social y cultural arroja un balance más bien pobre en los siete años de vigencia del Proceso de Barcelona debido posiblemente al sentimiento secular mutuo de rechazo entre el mundo occidental y las sociedades musulmanas, y el 11 de septiembre de 2001 lo que ha hecho ha sido provocar un interés mayor en las sociedades europea y estadounidense por unos problemas que estaban latentes y a los que no se les había prestado atención suficiente.

La aceptación de la universalidad de los derechos humanos es el medio adecuado para superar las tensiones interculturales, si bien la secularización de la concepción occidental de estos derechos se perfila como la principal línea divisoria entre el islam y Occidente. Sin la separación de la religión y la política en el islam, el encuentro entre las dos culturas difícilmente podrá llevarse a cabo y no será posible evitar fricciones entre las riberas norte y sur del Mediterráneo.

Al Qaida está utilizando en su provecho las tesis de Samuel P. Huntington al afirmar que:

«Los musulmanes deben saber bien que sus enemigos no son otros que los judíos y la cruzada de los cristianos.»

La organización terrorista anuncia al mismo tiempo su participación en el conflicto árabe-israelí y trata de fomentar el odio hacia Israel y Estados Unidos, incluso en países tradicionalmente aliados de éstos como Jordania, Egipto y la Arabia Saudí.

La complejidad y riqueza del fenómeno islamista, y las relaciones que puedan establecerse entre fundamentalismo y terrorismo, aconsejan la perentoria puesta en práctica del diálogo entre culturas y civilizaciones y los intercambios culturales, intelectuales y sociales. Para hacer frente a esta necesidad, en el PAV se acuerda crear una Fundación Euromediterránea, donde pueda realizarse este diálogo, y además celebrar un Foro Civil para implicar más a la sociedad civil en el PEM.

Las medidas para fomentar la confianza y seguridad en el Mediterráneo son quizás las que se han encontrado siempre con mayores obstáculos,

pues ya en el año 1996 se tropezó con la rigidez de Israel, lo que a su vez ocasionó un endurecimiento de las posturas en el lado árabe. Por otra parte, el conflicto palestino-israelí ha contaminado en todo cualquier posible entendimiento en este campo.

En lo que a seguridad se refiere, lo más relevante del 11 de septiembre 2001 ha sido su impacto en las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea. A partir de esa fecha, el mundo tuvo la sensación de que el presidente Bush y Europa encontrarían la manera de superar la desconfianza de los meses precedentes, pero poco tiempo después, la brecha trasatlántica se agravó como consecuencia del unilateralismo frente al multilateralismo europeo y se estableció una compleja lista de desafíos para las relaciones mutuas siendo los más destacables el conflicto árabe-israelí, al no estar de acuerdo los europeos con la actitud norteamericana, y la distinta percepción sobre el caso de Irak y Sadam Husein, a quien la Administración Bush considera como la personificación de las amenazas a las que se enfrenta Estados Unidos.

En esta situación, la atención de Estados Unidos y de la Unión Europea se centró en la OTAN, cuyo futuro para algunos estaba en duda, y para otros iniciaba una nueva era.

La OTAN ha tenido siempre una importancia fundamental para la seguridad en el Mediterráneo y especialmente desde que el día 8 de febrero de 1995 se puso en marcha el Diálogo Mediterráneo de la OTAN, con la finalidad de establecer medidas de confianza mutuas. Las conversaciones políticas, la participación en programas científicos y de información, la asistencia a ejercicios navales y terrestres de la OTAN, a cursos en la Escuela de la OTAN de Oberammergau y NAFDECOL y la participación de algunos países (Egipto, Jordania y Marruecos) en la Fuerza de Implementación (IFOR) y más tarde en la de Estabilización (SFOR) de la OTAN desplegadas en Bosnia, han contribuido a disminuir los recelos de algunos grupos norteafricanos que perciben en ocasiones las iniciativas de la Organización como medidas de carácter militar dirigidas contra sus países.

La Cumbre de Praga había sido esperada con atención como termómetro de la situación de las relaciones trasatlánticas y definitoria de las nuevas estrategias con las que la OTAN hará frente a los desafíos surgidos después del 11 de septiembre

Celebrada el día 21 de noviembre, la declaración emitida a la terminación de la Cumbre ha constatado un incremento en la temperatura de las rela-

ciones entre la Unión Europea y Estados Unidos que como se señalaba antes, pasaban por un prolongado periodo de enfriamiento. El tono de las intervenciones del presidente Bush fue de atención y respeto hacia los aliados europeos y logró la satisfacción de estos.

La declaración destaca la amenaza que plantean el terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva y de sus sistemas de lanzamiento, y reafirma que el desarme, el control de armamentos y la no proliferación son esenciales para prevenir la extensión y empleo de estas últimas armas. Propone llevar a cabo un planeamiento de emergencia civil para mejorar la preparación contra los posibles ataques con agentes químicos, biológicos y radiactivos contra la población civil.

Ha sido importante que la OTAN haya establecido en Praga la definición de un «concepto militar» para defenderse del terrorismo. A partir de ahora, se entenderá como terrorismo:

«El uso ilegal o la amenaza del uso de la fuerza o violencia contra personas o propiedades con el objeto de coartar o intimidar a los gobiernos o sociedades para obtener objetivos políticos, religiosos o ideológicos.»

En relación con el Diálogo Mediterráneo, la Declaración dice lo siguiente:

«Reafirmamos que la seguridad en Europa está estrechamente unida a la seguridad y estabilidad en el Mediterráneo. Por ello decidimos elevar sensiblemente las dimensiones políticas y prácticas de nuestro Diálogo Mediterráneo como parte integrante del enfoque de cooperación de la Alianza a la seguridad. A este respecto, nos esforzaremos en una cooperación útil e incrementada y en una interacción efectiva en materias de seguridad de interés mutuo, incluyendo las relacionadas con el terrorismo, en la forma apropiada, en las que la OTAN pueda proporcionar un valor añadido. Reiteramos que el Diálogo Mediterráneo y otros esfuerzos internacionales, incluido el Proceso de Barcelona de la Unión Europea, son complementarios y se refuerzan mutuamente.»

La Cumbre de Praga, aún cuando ahora haya que esperar sus resultados prácticos ha sido beneficiosa para el cesto de política y seguridad del Proceso de Barcelona y sus planteamientos tendrán posiblemente más aceptación que rechazo entre los socios del sur y este del Mediterráneo, y podría contribuir a que llegara a aprobarse la Carta Euromediterránea de Seguridad.

Como conclusión final de este trabajo, puede afirmarse que el impacto del 11 de septiembre 2001 en el Proceso de Barcelona ha sido positivo al poner en evidencia la necesidad de grandes dosis de solidaridad entre las orillas norte y sur del Mediterráneo para enfrentarse a los complejos desafíos del siglo XXI. Si no se solucionan las tensiones y conflictos localizados en esta línea de contacto entre culturas y civilizaciones, y aquellos otros de carácter global como el terrorismo, la proliferación de armas de destrucción masiva, las presiones migratorias y el radicalismo islámico, el *Mare Nostrum* en lugar de ser un espacio de paz y progreso, se convertirá en un peligroso polvorín y en un ámbito de permanente conflicto.